

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANI JURÍDICO PROVISTO POR EL PROFESOR DOCTOR RAMON SILVA

- Ley N° 4251/10 “Ley de Lenguas” – En castellano
- Ley N° 4251/10 “Ley de Lenguas” – En guaraní
- Acordada N° 838/13 “De la Implementación de la Ley de Lenguas en el Poder Judicial”.
- 100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

MARCELO ETIENNE

0981 229 231

**DELEGADO T.T
NOTARIADO 2017**

LEY N° 4251/10
“LEY DE LENGUAS”
EN CASTELLANO

NOTARIADO 2017

TÍTULO I DE LAS DECLARACIONES FUNDAMENTALES CAPÍTULO I DE LOS FINES

Art. 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las modalidades de utilización de las lenguas oficiales de la República; disponer las medidas adecuadas para promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas del Paraguay y asegurar el respeto de la comunicación visogestual o lenguas de señas. A tal efecto, crea la estructura organizativa necesaria para el desarrollo de la política lingüística nacional.

Art. 2°.- De la pluriculturalidad. El Estado paraguayo deberá salvaguardar su carácter pluricultural y bilingüe, velando por la promoción y el desarrollo de las dos lenguas oficiales y la preservación y promoción de las lenguas y culturas indígenas. El Estado deberá apoyar a los esfuerzos para asegurar el uso de dichas lenguas en todas sus funciones sociales y velará por el respeto a las otras lenguas utilizadas por las diversas comunidades culturales en el país.

Art. 3°.- De las lenguas oficiales. Las lenguas oficiales de la República tendrán vigencia y uso en los tres Poderes del Estado y en todas las instituciones públicas. El idioma guaraní deberá ser objeto de especial atención por parte del Estado, como signo de la identidad cultural de la nación, instrumento de cohesión nacional y medio de comunicación de la mayoría de la población paraguaya.

Art. 4°.- El guaraní en las organizaciones supranacionales. El Estado promoverá el reconocimiento del guaraní como lengua oficial de las organizaciones supranacionales que integre.

Art. 5°.- De la promoción de las lenguas originarias. El Estado promoverá la preservación y el uso de las lenguas originarias de América, tanto en el país como en las organizaciones internacionales en las que participe.

Art. 6°.- De la enseñanza de lenguas extranjeras. El Estado promoverá la enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente de aquellas que son lenguas oficiales de los Estados coasociados en Organizaciones supranacionales.

Art. 7°.- De la no discriminación por razones Lingüísticas. Ninguna persona ni comunidad lingüística será discriminada ni menoscabada por causa del idioma que utiliza. Los tribunales del fuero jurisdiccional correspondiente serán competentes para conocer de las violaciones que se produzcan en relación con los derechos lingüísticos reconocidos por esta ley a los habitantes del Paraguay.

Art. 8°.- Del valor jurídico de las expresiones. Las declaraciones ante cualquier autoridad y los documentos públicos y privados producen los mismos efectos jurídicos si se expresan total o parcialmente en cualquiera de los idiomas oficiales. Cuando el lenguaje utilizado sea visogestual o lengua de señas, su transcripción para uso oficial se hará en el idioma oficial que se considere pertinente para el caso.

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS

Art. 9°.- De los derechos lingüísticos individuales: Todos los habitantes de la República tienen derecho a:

- 1.- Conocer y usar las dos lenguas oficiales, tanto en forma oral como escrita, y a comunicarse con los funcionarios públicos en general en una de ellas. Los ciudadanos indígenas tienen además el derecho a conocer y usar su lengua propia.
- 2.- Recibir información en su lengua, de parte de los empleadores privados, en los temas laborales y administrativos de interés general.
- 3.- Recibir información oficial en guaraní y en castellano a través de los medios de comunicación del Estado o de los medios de comunicación privados que emitieren información oficial del Estado.
- 4.- No ser discriminado por razón de la lengua utilizada.
- 5.- Utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales ante la administración de justicia y que sus declaraciones sean transcriptas en la lengua elegida sin mediar traducción alguna. La persona usuaria de otra lengua tiene derecho a ser asistida en juicio por personas que conozcan su idioma.
- 6.- Recibir desde los inicios del proceso escolar la educación formal en su lengua materna, siempre que la misma sea una de las lenguas oficiales del país o una lengua indígena.
- 7.- Aprender otras lenguas nacionales y extranjeras.

Art. 10.- Derechos lingüísticos colectivos nacionales. Son derechos lingüísticos de la comunidad nacional:

- 1.- Contar con un plan de educación bilingüe guaraní – castellano en todo el sistema de educación nacional, desde la educación inicial hasta la superior, y con planes diferenciados para los pueblos indígenas.
- 2.- Tener disponibles los servicios del Estado en las dos lenguas oficiales.
- 3.- Tener la presencia equitativa de las lenguas guaraní y castellana en los medios de comunicación del Estado y en los programas oficiales emitidos por medios privados de comunicación.
- 4.- Contar con servicios informativos estatales y señalizaciones, en ambas lenguas oficiales.

Art. 11.- De los derechos lingüísticos colectivos comunitarios. Son derechos lingüísticos de las comunidades culturales diferenciadas:

- 1.- Ser reconocidas como miembros de una comunidad lingüística diferente.
- 2.- Mantener la lengua y cultura propias de su pueblo.
- 3.- Asociarse con otros miembros de su misma comunidad lingüística para la defensa y promoción de la lengua y la cultura propias.

NOTARIADO 2017

4.- Recibir colaboración de los miembros de la comunidad nacional ante complicaciones transfronterizas.

Art. 12.- De la responsabilidad del Estado hacia los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional tienen derecho a recibir apoyo del Estado para garantizar la supervivencia y funcionalidad de sus lenguas y culturas, como medio para fortalecer su identidad étnica.

Art. 13.- De las minorías culturales no indígenas. Las comunidades culturales no indígenas tienen derecho a contar con facilidades para acceder al conocimiento y uso de las lenguas oficiales de la República, sin perder el derecho de usar sus respectivas lenguas.

CAPÍTULO III

DEL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES EN EL ÁMBITO PÚBLICO

Art. 14.- De las leyes y demás disposiciones normativas. Las leyes de la República del Paraguay serán promulgadas en idioma castellano, pero las instituciones del Estado deberán contar con textos en las dos lenguas oficiales, una vez establecidos el alfabeto y la gramática oficial aplicable. Igual procedimiento se utilizará con las demás disposiciones normativas de rango inferior a la ley, incluidas las ordenanzas municipales, una vez establecidos el alfabeto y la gramática oficial del idioma guaraní.

Art. 15.- Del uso en el ámbito judicial. Ambas lenguas oficiales serán aceptadas indistintamente en la administración de la justicia. Para el efecto, la misma deberá tener operadores y auxiliares de justicia con competencia comunicativa oral y escrita, en ambas lenguas oficiales. Las resoluciones definitivas que afecten a partes que sólo hablan el idioma guaraní se dictarán en ambas lenguas oficiales, una vez establecidos el alfabeto y la gramática oficial del idioma guaraní.

Art. 16.- De las comunicaciones. Los avisos, formularios e impresos oficiales estarán redactados en los dos idiomas oficiales. Asimismo, en la publicidad oficial se utilizarán equitativamente las dos lenguas oficiales, una vez establecidos el alfabeto y la gramática oficial del idioma guaraní.

Art. 17.- Del conocimiento de las dos lenguas oficiales para ocupar cargos públicos. Para el acceso a los cargos en los organismos públicos nacionales, departamentales y municipales como funcionarios, a igual idoneidad profesional, tendrán preferencia las personas con mayor competencia lingüística y comunicativa en las dos lenguas oficiales. Los funcionarios ya nombrados, que en razón de su cargo deban tener trato directo con las personas, dispondrán de cinco años para adquirir la competencia comunicativa oral en las dos lenguas oficiales. Dentro del territorio propio a una lengua indígena serán preferidas las personas con mayor competencia lingüística y comunicativa en la lengua indígena propia de dicho territorio.

Art. 18.- De los documentos de identidad. La cédula de identidad, el pasaporte y los demás documentos de identificación personal, contendrán los datos en ambas lenguas

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

oficiales, una vez establecidos el alfabeto y la gramática oficial del idioma guaraní.

Art. 19°. De la inscripción de títulos en los Registros Públicos. La inscripción de todo tipo de documentos y títulos en los Registros Públicos se hará en el idioma oficial en que esté redactado el documento.

Art. 20.- De la expedición de copias de documentos. Los Registros Públicos expedirán copias de los documentos inscriptos en guaraní o en castellano o en ambas lenguas, a elección del solicitante, siempre que se disponga de la versión respectiva. En caso de duda sobre el significado o alcance del documento, se realizará la interpretación sobre el texto original.

Art. 21.- Del respeto a la toponimia. Se conservarán en guaraní y en otras lenguas indígenas los nombres de poblaciones, ríos, cerros y otros accidentes geográficos. A solicitud de las comunidades afectadas, se recuperarán también los topónimos tradicionales que perduren en la memoria colectiva. Dichos topónimos serán escritos con el alfabeto propio de la lengua correspondiente.

Art. 22.- De las etiquetas. Una vez establecidos el alfabeto y la gramática guaraní, las etiquetas de los productos alimenticios y medicinales manufacturados o producidos en el país, estarán impresas en ambas lenguas oficiales.

Art. 23.- De los títulos académicos. Los títulos académicos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional serán impresos en ambas lenguas oficiales y en un solo lado, una vez establecidos el alfabeto y la gramática oficial del idioma guaraní.

Art. 24°. De la comunicación en los medios de transporte. En los medios de transporte público, los rótulos y los avisos orales se harán en las dos lenguas oficiales y en la lengua de uso mayoritario de los usuarios.

Art. 25.- De las rotulaciones. Las gobernaciones y las municipalidades promulgarán reglamentaciones y velarán por su cumplimiento para que las rotulaciones de calles, señalizaciones, letreros comerciales, nominación de centros educacionales, culturales, recreativos, sociales, deportivos, religiosos y otros, se expresen en ambas lenguas oficiales, una vez establecidos el alfabeto y la gramática oficial del idioma guaraní. En los territorios indígenas, se incluirán sus respectivas lenguas en las rotulaciones.

CAPÍTULO IV

DE LOS IDIOMAS EN LA EDUCACIÓN

Art. 26.- De la alfabetización en lengua materna. El niño y la niña que habiten el territorio nacional tienen derecho a recibir educación inicial en su lengua materna, siempre que la misma sea una de las lenguas oficiales del Estado. Los pueblos indígenas utilizarán en la etapa inicial de la educación escolarizada sus respectivas lenguas. Las demás comunidades culturales optarán por una de las lenguas oficiales.

Art. 27.- De la participación de la comunidad educativa. El Ministerio de Educación y

NOTARIADO 2017

Cultura dará participación a la comunidad educativa en la toma de decisiones acerca de la elección de la lengua de alfabetización inicial. La elección del diseño de educación bilingüe resultará de la aplicación de instrumentos de evaluación de competencia lingüística al educando y de los compromisos colectivos asumidos por la comunidad educativa.

Art. 28°. De la enseñanza de las lenguas oficiales. Las lenguas oficiales serán enseñadas en las instituciones públicas y privadas que integran el sistema educativo nacional, aplicando métodos que garantizan la máxima eficacia comunicacional.

Art. 29. De las lenguas oficiales como instrumentos didácticos. Las lenguas oficiales serán utilizadas como medio en la enseñanza en todos los niveles del sistema educativo: inicial, escolar básica, media y superior, de conformidad con la competencia requerida para cada nivel.

Art. 30.- De la formación del profesorado. Los centros de formación docente deberán preparar educadores bilingües, en guaraní y castellano. Según las circunstancias, en su ejercicio docente, los profesores emplearán las dos lenguas oficiales como medio didáctico. Dentro del territorio de una lengua indígena, deberán ser formados también en esa lengua, la cual se empleará adicionalmente como medio didáctico.

TÍTULO II

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS DE LA NACIÓN

CAPITULO I

DE LOS ORGANISMOS

Art. 31.- De la naturaleza. La Secretaría de Políticas Lingüísticas es un órgano dependiente de la Presidencia de la República, que cumplirá sus funciones en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría Nacional de Cultura. Estará estructurado en tres direcciones generales: Dirección General de Planificación Lingüística, Dirección General de Investigación Lingüística y la Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas.

Art. 32.- De la creación de los organismos. El diseño, implementación y supervisión de la política lingüística nacional estará a cargo de los organismos creados por la presente ley. El Presupuesto General de la Nación asignará los recursos necesarios para el cumplimiento de sus respectivas funciones.

Art. 33.- De la jefatura de la Secretaría. La Secretaría de Políticas Lingüísticas estará dirigida por un Secretario Ejecutivo nombrado por la Presidencia de la República, de entre las personas más idóneas en la materia regida por la presente ley.

Art. 34°. De las competencias de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. La Secretaría de

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

Políticas Lingüísticas es la autoridad de aplicación de la presente ley con la participación de organismos públicos y privados vinculados al tema. Es la responsable de planificar el uso de las lenguas, en especial las oficiales, en los ámbitos comunicacional, educativo, judicial, comercial, administrativo, político, profesional y en toda instancia de interacción social. Le compete igualmente promover investigaciones sobre el uso de las lenguas en el país.

Art. 35.- De las condiciones para ocupar los cargos. Para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo se requerirá título académico habilitante de grado universitario en materia de lenguas. El postulante debe ser una persona de reconocida trayectoria intelectual, ser competente en el uso de las lenguas oficiales y acreditar conocimientos sobre la situación lingüística del Paraguay. Para los Directores Generales se exigirán los mismos requisitos.

Art. 36°. De la calificación de los funcionarios. Los funcionarios de la Secretaría serán nombrados de acuerdo con las exigencias establecidas en las normas generales del empleo público. Serán técnicos especializados en alguna materia relacionada con el estudio de la lengua y con capacidad para comunicarse oralmente y por escrito en las lenguas oficiales.

Art. 37. De la Dirección General de Planificación Lingüística. Esta dependencia elaborará las normas necesarias para la aplicación de la presente ley. Promoverá proyectos y programas para la normalización de todas las lenguas utilizadas en el Paraguay, en especial de las lenguas oficiales, en todos los ámbitos de la interacción social.

Art. 38. De la Dirección General de Investigación Lingüística. Esta dependencia promoverá investigaciones sobre las lenguas utilizadas en Paraguay, en todos sus aspectos, con la finalidad de que los resultados se constituyan en bases referenciales para la toma de decisiones en la planificación lingüística.

Art. 39.- De la Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas. Esta dependencia registrará, tanto en forma oral como escrita, las lenguas indígenas y prioritariamente las que se encuentran en peligro de extinción. Se encargará también de la difusión de dichas lenguas, por los medios necesarios para darlas a conocer a toda la comunidad nacional.

Art. 40°. De las funciones específicas de la Dirección General de Planificación Lingüística. La Dirección General de Planificación Lingüística tiene las siguientes funciones:

- 1.- Velar por el respeto de los derechos lingüísticos individuales y colectivos expresados en esta ley.
- 2.- Asegurar que la utilización de las lenguas oficiales del país no sea discriminatoria en perjuicio de una de ellas.
- 3.- Promover y supervisar el uso de los idiomas oficiales en los formularios y documentos utilizados por los organismos oficiales, así como en los letreros, carteles y rotulaciones de calles realizadas por las municipalidades.
- 4.- Regular la presencia de las lenguas oficiales y de las lenguas indígenas del

NOTARIADO 2017

Paraguay en los medios de radiodifusión y televisión privados.

5.- Promover la presencia de las lenguas oficiales y de las lenguas indígenas de Paraguay en las nuevas tecnologías y en las industrias culturales.

Art. 41°. De las funciones específicas de la Dirección General de Investigación Lingüística. La Dirección General de Investigación Lingüística tiene las siguientes funciones:

1.- Promover y patrocinar estudios científicos para la identificación y caracterización del guaraní y castellano paraguayos como variedades idiomáticas propias del país, y la valoración y enseñanza de dichas variedades a fin de que sean asumidas por los compatriotas como signos de identidad cultural.

2.- Realizar y actualizar el inventario lingüístico del país y el censo de hablantes de todos los idiomas utilizados por comunidades de hablantes dentro del territorio nacional.

3.- Evacuar consultas que formulen las instituciones y las personas sobre cuestiones Lingüísticas.

4.- Otras referidas a las competencias propias de la Secretaría de Políticas Lingüísticas.

Art. 42. De las funciones específicas de la Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas. La Dirección de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas tiene las siguientes funciones:

1.- Registrar en forma oral y escrita todas las lenguas indígenas del Paraguay y prioritariamente de aquellas que se hallan en vías de extinción,

2.- Impulsar la revitalización de las mismas

3.- Promover el conocimiento, uso y valoración de las mismas en la comunidad nacional como parte importante del patrimonio cultural de la nación.

CAPÍTULO II

DE LA ACADEMIA DE LA LENGUA GUARANÍ

Art. 43.- De la naturaleza de la Academia. La Academia de la Lengua Guaraní es una entidad privada, sin fines de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio. La misma establecerá sus propios estatutos.

El Estado paraguayo otorgará anualmente, a través del Presupuesto General de la Nación, un fondo de ayuda para el sostenimiento de las actividades de la Academia.

Art. 44.- De la composición de la Academia. La Academia de la Lengua Guaraní representa la soberanía lingüística del pueblo hablante de dicho idioma. Estará integrada por los más destacados exponentes de los ámbitos lingüístico, literario y pedagógico de la lengua Guaraní, en número no superior a treinta. Su plantel inicial será de quince miembros y será instituido por la Secretaría de Política Lingüística, a través de un concurso público de títulos, méritos y aptitudes; fundados en las obras realizadas o escritas por sus autores y la trayectoria docente de los mismos. Dicho plantel dictará los

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

estatutos de la Academia y posteriormente ejercerá el derecho de coopción de sus futuros integrantes.

Art. 45.- De las competencias de la Academia. La Academia de la Lengua Guaraní tiene competencias para establecer la normativa de la lengua guaraní en sus aspectos ortográfico, lexicológico, terminológico, gramatical y discursivo. Le compete igualmente publicar los diccionarios y gramáticas oficiales de la lengua guaraní. Las tareas normativas se basarán en investigaciones Lingüísticas y atenderán las modalidades de uso de la lengua hablada.

Art. 46. De las funciones específicas. La Academia de la Lengua Guaraní tiene las siguientes funciones:

- 1.- Normativizar la lengua guaraní a partir de investigaciones Lingüísticas incluyendo las realizadas con hablantes de la lengua.
- 2.- Establecer el alfabeto guaraní sobre la base del utilizado en la Convención Nacional Constituyente de 1992.
- 3.- Elaborar el diccionario general de la lengua guaraní y mantenerlo actualizado.
- 4.- Elaborar la gramática fundamental de la lengua guaraní.
- 5.- Elaborar diccionarios terminológicos para áreas profesionales y científicas específicas.
- 6.- Identificar los mecanismos más adecuados para el enriquecimiento lexicológico del idioma guaraní, en especial de aquellos que le permitan crecer y modernizarse sin alterar esencialmente su estructura fonética, morfosintáctica y discursiva.
- 7.- Recopilar las palabras nuevas creadas naturalmente por los hablantes de la lengua guaraní y aprobar su incorporación formal al corpus lexical del guaraní.
- 8.- Recuperar el léxico antiguo y propiciar su uso funcional.
- 9.- Propiciar la incorporación de vocablos en uso en los dialectos indígenas de la familia lingüística guaraní.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

Art. 47. De la normativa de la lengua castellana. La normativa de la lengua castellana se regirá por las disposiciones de la Academia Paraguaya de la Lengua Castellana.

Art. 48.- De la composición transitoria de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. La actual Comisión Nacional de Bilingüismo integrará transitoriamente la Secretaría de Políticas Lingüísticas, hasta que ésta se halle plenamente constituida y se le asigne los recursos pertinentes en el Presupuesto General de la Nación.

Art. 49.- Los organismos del Estado. Los órganos señalados como autoridad de aplicación de la presente ley, darán participación en el proceso de aplicación de la política lingüística nacional a las instituciones privadas abocadas al mismo tema y, en concierto

NOTARIADO 2017

con ellas, adoptarán todas las medidas necesarias para su aplicación progresiva.

En el caso de los pueblos indígenas, los mismos son responsables de sus respectivas lenguas.

Art. 50.- Reglamentación. La autoridad de aplicación reglamentará los artículos referentes a la lengua visogestual o lengua de señas y, aquellos que por su complejidad necesiten de mayor desarrollo normativo.

Art. 51.- Implementación. La implementación de las obligaciones derivadas de la presente ley que requieran una expresión escrita, sólo serán exigibles una vez transcurridos tres años del establecimiento del alfabeto y la gramática oficial del idioma Guaraní por parte de la Academia de la Lengua Guaraní.

Art. 52. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY N° 4251/10
“LEY DE LENGUAS”
EN GUARANI

NOTARIADO 2017

MOAKÁHA I

PYENDAKUÉRA OÑEMOĨVA KUAAPYRÁ

PEHĒNGUE I

OJEHUPYTYSÉVA

Artículo 1^a. (peteĩha) Mba'erāpa. Ko léi omohenda mba'eichapa ojeporúta tetã Paraguái ñe'ẽtee mokõivéva; ombohape tembiapopyrã oñemotenonde ha oñembojerioviaukávo ypykuéra tetãmeguáva ñe'ẽ jepuru, ha avei oñemboaje hağua iñe'ẽngúva ñe'ẽ reko. Umivarã omoĩ tembiapopy mboguataharã tekotevêva, omoañete kuaa va'erã ko'ã ñe'ẽnguéra rekorã tetã omoĩva.

Art. 2^a. Teko jopara rehegua. Paraguái Pokatuenda oñangarekova'erã heko joparaeta ha iñe'ẽtee mokõire, tove tojehapyaty ha tahekojera mokõive, ha upéicha avei toñeñangareko ha toñemotenonde avaitéva reko ha iñe'ẽnguéra. Pokatuenda oykekova'erã chupekuéra iñepia'ãme, ojepyntaso jave iñe'ẽnguéra jeporu ha ñemyasãi rehe opa hendáicha ha opaite hendápe, ha oñangarekova'erã avei oñemboajévo ambue ñe'ẽ oiporúva tapicha aty heko ambuéva, oĩva tetãpyre.

Art. 3^a. Tetã ñe'ẽ tee mokõive rehegua. Tetã ñe'ẽ tee mokõive oñemboaje ha ojeporu jopava'erã mbhapyve tetã Pokatu Moakãhápe ha opaite tetã rembiapo oñemboguatahápe. Pokatuenda ombojeroviaveva'erã ñe'ẽ Guaraní, kóva ha'e rupi tetã reko tee kuaaukaha, tetãyguápe ombojoaju ha omopeteĩva, ha ñe'ẽ ojeporuvéva tetãpyre.

Art. 4^a. Guaraní ñe'ẽ tetãnguéra joajúpe. Pokatuenda oku'eva'erã ikatuhağuaíicha ñe'ẽ Guaraní ojehechakuaa umi tembiapopy mboguatahápe, tetãnguéra ojoajuhápe ha oikehápe Paraguái ñe'ẽteéicha.

Art. 5^a. Ypykuéra ñe'ẽ motenonde rehegua. Paraguáy Pokatuenda oipysyrõva'erã oñemoingove ha ojepuru hağua mayma Amérika ñe'ẽ ypykue, tetãpyre ha avei opa tembiapopy omboguatahápe tetãnguéra aty oĩva ha oikehápe Paraguay

Art. 6^a. Pytagua ñe'ẽ mbo'e rehegua. Paraguái Pokatuendaomongu'eva'erã pytagua ñe'ẽ ñembo'euka ha omotenondeva'erã umi tetã aty ñe'ẽtee omboguatahápe hendive tembiapo joaju.

Art.7^a. Ñemboyke'y ñe'ẽ ambue jepuru haguére rehegua. Noñembo'ykeiva'erã ha ndojeapo'iriva'erã mba'eveichagua tapicha tapicha aty jepe aipo iñe'ẽ ambue haguére. Umi tekojoja ombohapéva ruvicha ikatupyryva'erã oikumby hağua oiméramo ojapyharáva ã mboaje ári, oñeme'eva mayma tapicha Paraguái oikóvape.

Art. 8^a. Ñe'ẽngue ñemboaje rehegua. Mayma ñe'ẽme'ẽ ojejapóva opáichagua mburuvicha renondépe téra kuatiápe, taha'e Pokatuendapegua téra upepegua'yva, peteĩchante oñemomba'eva'erã oĩmba téra noimbáiramo pe he'iva oimera'eva ñe'ẽteépe. Ojeporúramo iñe'ẽngúva ñe'ẽ, oñembohasava'erã Paraguái ñe'ẽtee peteĩvape, ouporávéva oñemboğua hağua upévape.

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO
PEHÊNGUE II
DERÉCHO ÑE'Ê REHEGUA

Art. 9ª. Ñe'ê jepuru mboaje tapicha peteĩteĩme ġuarã. Opavaite tapicha oikóva Paraguay retãme ojehekome'êva'erã ã mba'êpe:

1.- Oikuaa ha oiporúvo mokõive Paraguái ñe'êtee, oñe'êvo ha ohaívo, ha ombohovaívo ichupe mba'apohára Pokatuendapegua ñe'ê ha'e oiporúvape. Ypykuérape oñemboajeva'erã avei oikuaa ha oiporúvo iñe'êtee.

2.- Oñemomarendúvo ichupe iñe'ême umi mba'e hembiaapo ha imba'apo repykue reheguáva rehe, momba'apohára ndaha'éiva Pokatuendapeguágui.

3.- Oñemoġuahêvo ichupe Pokatuendapegua marandu Guarani ha *castellano*-pe, tetãmegua momaranduha térã upepegua'ỹva rupive, omyasãiva marandu Pokatuendapegua.

4.- Nomboykeívo ichupe avave oiporu haguére ñe'ê oiporuséva.

5.- Oiporúvo oimeraêva Paraguái ñe'êtee tekojoja motenondehára renondépe, ha oñemboguapývo iñe'êngue kuatiápe upe ñe'ê ha'e oiporuva'ekuépe, oñembohasa'ỹre ambue ñe'ême. Tapicha oipurúva ambue ñe'ê ikatu oñepytyvõuka iñe'ê oikuaávere oikéramo tekoñekarãime.

6.- Oñehekombo'évo ichupe iñe'ê ypykuépe oñepyrũvo oñemoarandu mbo'ehaópe, ha'éma guive upe iñe'ê ypy Paraguái ñe'êtee peteĩva térã avaiite ñe'ê peteĩ.

7.- Oikuaapyhývo ambue Paraguái ñe'ê oĩva ha avei pytagua ñe'ê.

Art. 10ª. Ñe'ê jepuru oñondivepa tetãpyre mboaje rehegua. Tetãygua ohupytykuaa oñondivepa ñe'ê jeporu rehe:

1.- Ojehekombó'évo chupe ñe'êkõime, -Guarani ha *castellano*- pe tetã rekombó'e ipukukue javeve, iñepyrũha guive hu'ã meve, ha ypykuérape ġuarã, tekombó'e iñambueva'erã.

2.- Oguerekóvo hembiporúrõ Pokatuenda omba'apóva mokõive iñe'êteepe.

3.- Orekóvo mokõive ñe'êtee ojoja Pokatuenda momaranduhápe ha upéicha avei apopyrã Pokatuenda omyasãivape ambue momaranduhára tetã mba'e'ỹva rupive.

4.- Oñemomarendúvo chupe kuaaukaha tetã mba'éva rupive ha oñemoĩvo opaite mba'e rechaukaha mokõive tetã ñe'êteepe.

Art. 11ª.- Tavaygua ñe'ê jeporu oñondivepa ñemboaje. Tavaygua heko ambuéva ñe'ê jeporu oñemboajeva'erã:

1.- Ojehechakuaávo tavaygua aty iñe'ê ambueichagua.

2.- Akói omboguatávo iñe'ê ha hekotee hetã repykue mba'éva.

3.- Ijatývo hapichakuéra iñe'ê ha hekorekoha ndive, oñangareko ha omotenondévo hetã repykue reko ha iñe'êtee.

4.- Opaite tapicha Paraguáigua oipytyvõvo chupe ojechavaíro tetã yvy rembe'y rupi.

NOTARIADO 2017

Art. 12^a. Tetã rembiaporãngatu pyykuéra rehehápe. Paraguái Pokatuenda oipytyvõva'erã avakuéra oíva tetãpyrépe omoingove are ha oiporukuaa hağua katuete ñe'ẽ ha heko yma, omombaretévo itáva rekotee.

Art.13^a. Tapicha aty heko ambuéva ndaha'éiva avaiite rehegua. Umi tapicha aty heko ambuéva, ndaha'éiva avaiite ha imbovóva tetãme, oñepytyvõva'erã oikuaa ha oiporúvo tetã ñe'ẽteekuéra, oheja'ỹre hetã ypykue ñe'ẽ.

PEHÊNGUE III

MOKÕIVE ÑE'ÊTEE JEPORU REKO TETÃ REMBIAPOPYE

Art. 14^a. Leikuéra (Tekome'ẽ) jeporu tetã rembiapoukapy rehegua. Mayma léi oñemboajéva Paraguái retãme, osẽva'erã castellano ñe'ẽme ha katu Pokatuenda-pegua institución-kuéra orekova'erã ikuatiakuéra mokõive tetã ñe'ẽteépe, oñemohendãma guive achegety ha ñe'ẽtekuaa Pokatuenda omboajéva ojeporu hağua. Upéicha ojejavova'erã avei opáichagua tembiapoukapy ndaha'éiva léi reheve, ha umíva apytépe oíta sãmbyhyharakuéra oguenohẽva, oñemoĩ rire achegety ha ñe'ẽtekuaate omboajéva Guarani ñe'ẽ.

Art. 15^a. Teko ñembojojápe jeporureko rehegua. Mokõive tetã ñe'ẽtee ojeporuva'erã tekojoja oñemotenondehápe. Upevarã upépe oíva'erã pytyvõharakuéra ikatupyryva mokõive ñe'ẽme, ñomongeta ha ñembokuatiápe. Teko ruvicha rembiapoukapy oñemohu'áva, tapicha oñe'ẽva Guaraníme año rehegua, ojejavova'erã mokõive tetã ñe'ẽtépe, oñemohenda rire achegety ha ñe'ẽtekuaa tee omboajéva Guarani ñe'ẽ.

Art. 16^a. Marandu rehegua. Umi marandu opoíva mburuvichakuéra, kuatia imyenyhẽmbyrãva ha opáichagua tetã kuatiátee, ojejavova'erã mokõive tetã ñe'ẽteépe. Upéicha avei umi Pokatuenda ñemomandúpe ojeporu jojáva'erã tetã ñe'ẽtee mokõive, oñemoĩ rire achegety ha ñe'ẽtekuaa tee omboajéva Guarani ñe'ẽ.

Art. 17^a. Katupyry rehegua mokõive ñe'ẽme oñemba'apo hağua tetã rembijokuairõ. Tapichakuéra omba'aposéva tetã rembijokuairõ, taha'e Paraguái Pokatuenda térã Táva Pokatu pogyúpe, ikatupyry jojárõ hembiapópe, oñembojeroviáta upe ikatupyryvéva mokõive tetã ñe'ẽteépe, ñe'ẽkuaa ha ñomongetápe. Umi omba'apómava voi hína, ha ojesareko katúva tapichakuéra rehe, oguereko po ary ko léi osẽ rire oñembokatupyry hağua mokõive tetã ñe'ẽ teépe. Ypykuéra ñe'ẽ rendápe, ojeporavóta umi tapicha ikatupyryvéva upépegua ñe'ẽme, ñe'ẽkuaa ha ñomongetápe.

Art.18^a. Kuatia tapicha rerakuaakaha rehegua. Kuatia, tapicha rerakuaakaha, ombokatúva jehasa pytagua retãre, ha mayma kuatia kuaakaha, oñenohẽva'erã mokõive ñe'ẽ teépe, oñemoĩ rire achegety ha ñe'ẽtekuaa tee omboajéva Guarani ñe'ẽ.

Art. 19^a. Kuatia mbojaragua ñemboguapy tetã oñongatukahápe rehegua. Opaichagua kuatia ha mba'e jerereko rechaukaha oñemboguapyva'erã upe tetã oñongatukahápe ojehai ypy hagueichaite, tetã ñe'ẽ tee ojehai haguépe.

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

Art. 20^a. Kwatia ñeme'ë rehegua. Tetã rembijokuái kwatia ñongatuhára ome'ëva'erã ambue kwatia upeichaguaité castellano térã guaraníme pe omba'ejerurévape, ýrõ katu mokõive ñe'ëme, oipotaháicha pe ojeruréva, ojerekóma guive upéva jehaipyre. Oiméramo nahesakãporã he'iséva térã ojapyhýva umi kwatia, oñemboajeva'erã pe ijypykue he'íva.

Art. 21^a. Tenda réra ypykue ñemoañete rehegua. Ojerereko katuva'erã umi táva, ysyry, yvyty, ha ambue yvy joavy réra oíva Guaraníme ha ambue América ñe'ëme.

Oñembojevvyva'erã avei umi téra tuja oíva gueteri tavaygua mandu'ápe, ojeruréma guive tapichakuéra upépegua. Umíva umi térã ojehaiva'erã upe ñe'ë omoíva'ekue chupe herarã achegetýpe.

Art. 22^a. Mba'erepy réra rehegua. Oñemoĩ rire achegety ha ñe'ëtekuaa tee omboajéva Guaraní ñe'ë, mba'erepykuéra ryrúre –hi'upyrã, pohã ojejapóva tetãme- oñemoíva'erã tetã ñe'ëtee mokõivépe, héra ha opaite ikuaapyrã.

Art. 23^a. Kwatia arandu momba'uha rehegua. Opáichagua kwatia, arandu momba'uha, ome'ëva temimbo'épe mbo'ehakuéra, tekombo'e ypy guive hu'áite peve, oíva'erã mokõive tetã ñe'ë teépe ha peteĩ hovárente.

Art. 24^a. Marandu mba'yru tapicha rorojahápe rehegua. Mba'yru tapicha rorojahápe, marandu ojehecháva ha oñehendúva ojejapova'erã tetã ñe'ë tee mokõivépe ha avei umi mba'yru oipuruvéva ñe'ëme.

Art. 25^a. Terakuéra ojehecháva rehegua. Departamento (Tekuairenda) ha tavakuéra rekuái mayma, oguenohéva'erã tembiapoukapy ha oñangarekova'erã imboaje rehe oñemoĩ ha'gua tetã ñe'ëtee mokõivépe opáichagua téra ojehecháva, taha'e tape réra, tape rechaukaha, óga ñemuha, mbo'ehao, atyha, aranduo, vy'aha, tupão ha ambuevéva. Upéicha avei ojepuruva'erã aváite ñe'ë hekohakuérape.

PEHÊNGUE IV

ÑE'ËNGUÉRA JEPORU TEKOMBO'ÉPE.

Art. 26^a. Tekombo'e ñe'ë ypykuépe rehegua. Mitã oikóva Paraguáype –taha'e kuña térã kuimba'e- ojehekombo'e ñepyrũva'erã iñe'ë ypykuépe, ha'éma guive upéva tetã ñe'ëtee peteíva. Ypykuéra omoñepyrũkuua mitã ñehekombo'e iñe'ëteépe. Ambue tapichakuéra heko ha iñe'ë ambuéva ombojoroviava'erã tetã ñe'ëtee peteíva.

Art. 27^a. Tekombo'e atýpe jeike rehegua. Ministerio de Educación (Tekombo'e Mboguatahára) omba'apova'erã Comunidad Educativa (Aty Tekombo'egua) ndive ojeporavóta jave mba'e ñe'ëmepa mitãnguéra oñehekombo'e ypyta. Upe tekombo'erã jeporavópe ojehecha poráva'erã mba'e ñe'ëmepa mitãnguéra ikatupyryve ha oípa Comunidad Educativa upepegua oykeko haguáicha upéva upe mbo'erã reko.

Art. 28^a. Tetã ñe'ëteekuéra mbo'e rehegua. Tetã ñe'ëteekuéra oñembo'eva'erã opavaite mbo'ehaópe, tetã remimoíhvape ha ha'e'ýhvape, oíma guive sistema educativo rakãramo, ha oñembo'eva'erã ikatuhaguáicha mitãnguéra oñe'ëkuua ha ohaiporã omohu'ãvo hekombo'e.

NOTARIADO 2017

Art. 29^a. Ñe'ëtee jeporu ñehekombo'épe. Mokõive ñe'ëtee ojeporuva'erã opaite mba'e ojeporúva tekombo'épe, iñepyrüete guive hu'áite meve: ijypyguápe, tekotevëkuetévape, mbytepegua ha hu'áiteguápe, oñekotevëháicha umi rupi.

Art.30^a. Mbo'ehararã ñembokatupyry rehegua. Mbo'ehao omoarandúva mbo'ehararãme ombokatupyryva'erã mbo'ehára iñe'ëkõiva, Guarani ha castellano-pe. Tekotevëhápe omba'apokuévo mbo'eharakuéra oiporuva'erã mokõive tetã ñe'ëtee ombo'e haġua opaite mba'e. Avaite rekohápe oñembokatupyryva'erã avei mbo'ehára ñe'ë upepeguápe, oipurukuaa haġua upéva oporombo'e jave.

MOAKÁHA II OÑEMOÍ HA OÑEMOHENDÁVA OÑEMBOGUATA HAġUA TETÁ POLÍTICA ÑE'É REHEGUA PEHĒNGUE I MBA'E'APOHA REHEGUA

Art. 31^a. Mba'etépa hína Ñe'ënguéra Rerekua. Ñe'ënguéra Rerekua hína Tetã Pokatuenda remimoí, omba'apóva jekupytype Ministerio de Educación y Cultura ha Secretaría Nacional de Cultura ndive. Hembaporã oñemboja'o mbohapy motenondeha guasúpe: Motenondeha Ohape'apóva ñe'ë, Motenondeha Ohapojo'óva ñe'ë ha Motenondeha Oñongatu ha Omoingovéva Ypykuéra Ñe'ë.

Art. 32^a. Mba'e'apoharã oñemoíva rehegua. Tetã ñe'ë rehegua polítika ñembohape, ñemboguata ha jehechajo'a opyta umi mba'e'apoharã omoíva ko léi pópe. Tetã Viru Jepururã ñembohysýipe oñeme'ëva'erã tekotevëva guive omba'apo porã haġua.

Art. 33.- Ñe'ënguéra Rerekua Sambyhyhára rehegua. Ñe'ënguéra Rerekua oisãmbyhyva'erã Secretario Ejecutivo oñemoíva tetã ruvichapavë kuationa apoukapy rupive, ha upéva osëva'erã tapicha ikatupyry añetéva ko'ã mba'épe apytégui, he'iháicha ko léi.

Art. 34^a. Ñe'ënguéra Rerekua rembiaporãtee. Ñe'ënguéra Rerekua oí mburuvicharõ kóva ko léi oñemoañete haġua, mayma Paraguái Pokatuenda mboja'opy ha tapichakuéra remimoimby ñe'ënguéra rehe omba'apóva ndive. Ha'e ombohapeva'erã ñe'ënguéra jeporu porãve, ha tenonderãite tetã ñe'ëtee mokõivéva, taha'e ñe'ëasãime, tekombo'épe, tekojoja apópe, mba'e ñemuháme, kuationa ñemongu'épe, polítikape, mba'apópe ha opaite tapichakuéra ojotopahápe. Ha'e avei omyenondeva'erã tembiapo oikuaakáva mba'éichapa ojeperaturína mayma Paraguái ñe'ënguéra.

Art. 35^a. Tekotevëva ojeiko haġua Sambyhyhára ha Motenondeháraramo. Omba'aposéva Ñe'ënguéra Rerekuáramo oguerékova'erã arandu rechaukaha ome'ëva'ekue ichupe mbo'ehaovusu oñemoarandu haguépe ñe'ënguéra reko jekuaápe. Umi tapicha ojekuaava'erã iñaranduha; oipurukuaava'erã tetã ñe'ëtee mokõivéva

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

ha ohechaukava'erã oikuaa porãha Paraguái ñe'ẽnguéra reko. Motenondeharakuérape ojejerureva'erã peichaite avei.

Art. 36^a. Oguerekova'erã omba'apótava ñe'ẽ rerekuárõ . Tapicha omba'apótava ñe'ẽ rerekuáramo orekopaiteva'erã léi ojeruréva opavave tetã rembijokuáipe. Ikatupyryva'erã ñe'ẽ ñemboheko rakã peteĩvape ha ha'eveva'erã oiporúvo ñomongeta ha jehaípe tetã ñe'ẽtee mokõi véva.

Art. 37^a. Motenondeha Ohape'apóva Ñe'ẽ. Kóva ko terekua mboja'opy ombohekova'erã ko léi, ikatuhaçuáicha oñemoañete hembiapoukapy. Omongu'eva'erã opáichagua apopyrã ombojekótava ojeporu porãve haçua mayma Paraguáy ñe'ẽ ha tenondete tetã ñe'ẽtee mokõi véva, opáicha ha opaite hendápe.

Art. 38^a. Motenondeha Ohapoyo'ova ñe'ẽ. Kóva ko terekua mboja'opy ohapoyo'o ha oipyguarava'erã mayma ñe'ẽ Paraguáype ojeporúva, ombojehupotávo tembikuaa pyahu oñemomba'ekuaátava ñe'ẽ jehape'apópe.

Art. 39^a. Motenondeha Oñongatu ha Omombaretéva Ypykuéra Ñe'ẽ. Kóva ko terekua mboja'opy ombyaty ha oñongatupaiteva'erã ã rendupyrã ha ã techapyrãme opavaite ypykuéra ñe'ẽ, ha tenonderáite umi oguepotáva, oikuaaupotávo tetãyguára retakuépe. Omongu'eva'erã tembipopy oikuaaukáva ypykuéra ñe'ẽ tetãyguá apytépe, opaite hendáicha.

Art. 40^a. Motenondehára Ohape'apóva Ñe'ẽ Rembiapo tee rehegua. Kóva ko mboja'opy ojapova'erã katuete ã mba'e:

1.- Oñangarekova'erã toñemoañete opavaite tapicha ha tapicha aty derecho ñe'ẽnguéra rehegua kóva ko léi he'iháicha.

2.- Oñangarekova'erã ani ojeporu joavy tetã ñe'ẽtee peteĩva rehehápe.

3.- Omongu'e ha ohecha jey jeyva'erã ojeporu porãpa tetã ñe'ẽteenguéra umi kuatia imyenyhẽmbyrãme ha mayma kuatia ojejapóva tetã rembiapopýpe. Upéicha avei umi haipyre oñemoĩva ojehecha haçuame ha tapekuéra réra omoĩva táva rekuái.

4.- He'iva'erã mba'eichaitépa ojeporúta tetã ñe'ẽtee mokõivéva ha ypykuéra ñe'ẽ puhoe ha ta'angambyrýpe.

5.- Omongu'eva'erã tetã ñe'ẽnguéra tee ha avaitéva ñe'ẽnguéra jeporu umi mba'e pyahu osẽva tembiporurãme ha avei mba'e apopy teko jekuaukarãme.

Art. 41^a Motenondeha Ohapoyo'ova Ñe'ẽ Rembiaporã tee rehegua. Kóva ko mboja'opy ojapova'erã katuete ã mba'e:

1.- Omongu'e ha oykekova'erã opáichagua mba'e'apopy ojekuaa porãve potávo Guarani ha castellano Paraguái rekotee, ko'áva ha'égui ava tetã Paraguái mba'etee. Upévale oñemomba'eguasu ha oñembo'eva'erã ko'ã ñe'ẽ reko, ikatuhaçuáicha tapicha paraguáy ojapyhy imba'eteícha ha ãva rupive ojekuaauka ha'ehaichaite.

NOTARIADO 2017

2.- Oheka ha ombyatypaiteva'erã mayma ñe'ẽ Paraguáipe ojeporúva, oipapava'erã tapicha oñe'ẽva umi ñe'ẽme, ha ombopyahuva'erã mantereí umi kuaapyrã *censo* oguerúva, oïma guive tetãpype tapicha aty oiporúva umi ñe'ẽ.

3.- Ombohovaiva'erã opaite tapicha ha tapicha atykuera remiporandu ñe'ẽ reheguáva.

Art. 42° Motenondeha Ohapojó'ova ha Omyerakuáva Ypykuéra Ñe'ẽ. Kóva ko mboja'opy ojapova'erã katuete ã mba'e:

1.- Ombyaty ha oñongatupaiteva'erã oñehendu ha oñemoñe'ẽ haçuáicha kuatia ári opavaite ypykuéra ñe'ẽ, ha tenonderáite umi oguepotáva, oikuaaukapotávo tetãyguára retakuépe.

2.- Omongu'eva'erã tembiapo omoingove jey potávo umi ñe'ẽ.

3.- Oku'eva'erã ojekuaa, ojeporu ha oñembojerovia haçuá umi ypykuéra ñe'ẽ tetãyguá apytépe ha'e rupi umíva tetã mba'ete apyterekuete.

PEHÉNGUE II

ÑE'Ë GUARANI REREKUA REHEGUA

Art. 43ª. Ñe'ẽ Guarani Rerekua rekotee rehegua. Ñe'ẽ Guarani Rerekua hína tapicha aty oí'ýva Pokatuenda poguýpe ha oipytyvõva tetãme ha tetãyguápe; oñembohekova'erã léi rupive tapicharamoguáicha; oguerékova'erã mba'e imba'eteéva ha omoíva'erã estatuto ijupe. Paraguái Pokatuenda ome'ẽva'erã viru hembiporurã pe Tetã Viru Jipururã Ñembohysíi rupive ary ha arýpe, oipytyvõvo Ñe'ẽ Guarani rerekua omboguata haçuá hembiapoita.

Art. 44ª. Oítava Ñe'ẽ Guarani Rerekuáramo rehegua. Ñe'ẽ Guarani Rerekua pópe omoí ipokatu mayma tetãyguá ko ñe'ẽ oiporúva, hérape oiko haçuá ko ñe'ẽ reheve. Ipyte oíva'erã umi tapicha herakuáguasuvéva kóva ko ñe'ẽ jekuaápe, ñe'ẽ porã ñemyasáime ha iporombo'épe. Umíva, hetakuépe ohupytykuaa 30 peve. Oíva'erã 15 tenondeguáva oiporavova'ekue ñoha'ã rupive Ñe'ẽnguéra Rerekua. Upevarã ombojovakeva'erã arandu rechaukaha, tembiapokue, tapykuere, mba'e ojapo ha ohupytyva. Áva ipyendava'erã tapicha rembiapo téra ijehaipýpe ha mbo'ehára reko rapykuerepe. Upéva upe aty ñepyrymby omoíva'erã estatuto upe Ñe'ẽ Rerekuápe ha upe rire oiporavova'erã ñirĩnguerarãoimba peve.

Art.45ª. Ñe'ẽ Guarani Rerekua rembiaporãtee rehegua. Ñe'ẽ Guarani Rerekua rembiaporãngatu hína ko ñe'ẽ ñemboheko: ijeháipe, iñe'ẽndýpe, he'ísévape, iñe'ẽ ñemohendápe ha iñe'ẽ syrýpe. Ohechaukava'erã guarani ñe'ẽndý tee ha ijeporu porã rekotee, ojekuaa haçuá. Umivarã ohapojó'o pypukuva'erã Guarani ñe'ẽ ha ojapysaka poráva'erã ñe'ẽ ojeporúva rehe.

Art. 46ª. Hembiaporãite rehegua. Ñe'ẽ Guarani Rerekua omba'apova'erã katuete ã mba'e rehe:

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

- 1.- Omohendapaiteva'erã ko ñe'ẽ jeporureko ha upevarã ohaporekava'erã ha ohendukuaava'erã ñe'ẽ poruharakuérape.
- 2.- Omopeteiva'erã Guarani achegety ha upéva oñepyrũva'erã pe Tetã Amandaje Pavẽ Moĩmbahára oiporuva'ekuégui ary 1992-me.
- 3.- Ojapo ha ombopyahúne katuete ipukukuére Guarani ñe'ẽryrutee.
- 4.- Omboajeva'erã Guarani ñe'ẽ rekoteete, ombokuatia ha oikuaauka.
- 5.- Ojapova'erã ñe'ẽryru opáichagua mba'apoharakuéra rembiporurã ha tembikuaa remikotevẽme guarã.
- 6.- Ohekava'erã mba'éichapa Guarani ñe'ẽ omongakuaa porãvéta iñe'ëndy ha tenondete umi tape ombopyahu ha oguerojerakuaátava ko ñe'ẽ, omokangy'ỹre hekotee, iñe'ẽpu,ijsajaja, iñe'ẽjoaju reko ha iñe'ẽ syry.
- 7.- Ombyatyva'erã ñe'ẽ pyahu omoheñóiva ijeheguirei ñe'ẽ Guarani poruharakuéra, omboaje ha omoneĩ ijeike Guarani ñe'ẽryrúpe.
- 8.- Oñeha'áva'erã oguerojere ñe'ẽ tuja ho'ava'ekue tesaráipe, omoingove jey ha omoĩ ojeporu jey haгуáicha.
- 9.- Ombohapeva'erã toñemoinge umi ava Guaranietéva ñe'ẽ ko Guarani paraguáy ñe'ẽndýpe.

PEHĒNGUE VIII TEMIMOĨ PAHA

Art. 47ª. *Castellano ñemboheko rehegua.* *Castilla* ñe'ẽ ombohekova'erã upéva upe ñe'ẽ rerekua oĩva Paraguáiipe.

Art. 48ª. *Ñe'ẽnguéra Rerekuápe opyta sapy'átava rehegua.* Oñemoĩmba peve sãmbyhyharakuéra Ñe'ẽnguéra Rerekuápe, ha oñeme'ẽ peve chupe hekotevẽ tetã viru ñembohysýgui oike sapy'áta omba'apo upépe *Comisión Nacional de Bilingüismo*.

Art. 49ª. Umi Paraguái *estadomboja'opy* ko léi (tekome'ẽ) omoĩva imo'añeteharãramo, ohenduva'erã mayma tapicha atýpe, ñe'ẽ rehe omba'apóvape, omo'añetekuévo polítika ñe'ẽ rehegua omoĩva tetã; umíva ndive ha oñondivepa ombohapeva'erã ohóvo ko'ã tembiapoukapy. Ypykuéra apytépe ha'ekueraita ombohapeva'erã iñe'ẽnguéra ñemboheko.

Art. 50ª. Kóva ko léi omohenda ha omboguatáva ombohekova'erã umi *artículo* oñe'ẽva iñe'ẽngúva ñe'ẽ rekóre ha umi mba'e hypy'üeterei rupi oikotevẽva ñemyesakã rehe.

Art. 51.- Ñemboguata. Tembiapoukapy oséva ko léigui tekotevẽva oñemboguapy kuatiápe oñepyrũta ojejopy oñemoañetepotávo ohasa rire mbohapy ro'y Ñe'ẽ Guarani Rerekua omboheko rire Guarani achegety ha iñe'ẽ reko oñembokuatia rire.

Art. 52ª . Tojekuaaukáke kóva Tetã Ruvicha Pavẽme.

ACORDADA N° 838/13

**“POR LA CUAL SE FUNDAMENTA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE
LENGUAS EN EL PODER JUDICIAL DE
LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY”**

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte días del mes de setiembre de dos mil trece, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes, y los Excmos. Sres. Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, Miguel Oscar Bajac Albertini, Víctor Manuel Núñez, Sindulfo Blanco, José Raúl Torres Kirmsner, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Cesar Antonio Garay y Gladys Ester Bareiro de Módica, por ante mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que, el Paraguay es una nación pluricultural y pluriétnica, con varias familias lingüísticas, que han coexistido a lo largo de la prehistoria americana, descendientes de lágvidos, pámpidos y amazonides, que en el actual territorio paraguayo dieron origen a partir del Siglo XVIII, a la familia lingüística guaraní, que a partir del año 1537 ha producido una simbiosis cultural y racial con los hispanos que llegaron del antiguo continente europeo; tal situación ha permanecido durante todo el periodo colonial, y subsistido incluso luego de la formación del Estado Paraguayo en 1811; desembocando en el reconocimiento de la existencia de dos idiomas oficiales: el castellano y el guaraní, y de la conservación de otras lenguas pertenecientes a grupos originarios.

Que, siendo los Derechos Humanos aquellos inherentes a todas las personas, sin ningún tipo de distinción o bajo ninguna otra condición que la simple naturaleza humana; y resultando la lengua un componente elemental que conforma todo Derecho Humano, es imperativo reconocer a los idiomas castellano y guaraní como parte fundamental de desarrollo de la vida y la cultura del hombre paraguayo.

Que, la Constitución Nacional del año 1992, en su Preámbulo sostiene que “El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales, e integrado a la comunidad internacional, SANCIONA Y PROMULGA esta Constitución.”

Que, igualmente, en el artículo 77° - DE LA ENSEÑANZA EN LENGUA MATERNA se sostiene que “la enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando. Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la República. En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales.”

Que, en el artículo 140 – DE LOS IDIOMAS - de la Carta Magna de la República del Paraguay se indica que “El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades de utilización de uno y otro. Las lenguas indígenas, y las de otras minorías, forman parte del patrimonio

NOTARIADO 2017

cultural de la Nación”

Que, por Ley N° 1/89, el Estado Paraguayo ha ratificado el Pacto de San José de Costarrica, que en su Artículo 1° refiere: “Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económicas, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Que, la Ley 4251/2010 “De Lenguas”, en su artículo 1° indica “Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las modalidades de utilización de las lenguas oficiales de la República; disponer las medidas adecuadas para promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas del Paraguay y asegurar el respeto de la comunicación visogestual o lenguas de señas. A tal efecto, crea la estructura organizativa necesaria para el desarrollo de la política lingüística nacional”.

Que, asimismo, en el artículo 2° se estatuye “De la pluriculturalidad. El Estado paraguayo deberá salvaguardar su carácter pluricultural y bilingüe, velando por la promoción y el desarrollo de las dos lenguas oficiales y la preservación y promoción de las lenguas y culturas indígenas. El Estado deberá apoyar a los esfuerzos para asegurar el uso de dichas lenguas en todas sus funciones sociales y velará por el respeto a las otras lenguas utilizadas por las diversas comunidades culturales en el país”.

Que, el artículo 3° de dicha ley menciona “De las lenguas oficiales. Las lenguas oficiales de la República tendrán vigencia y uso en los tres Poderes del Estado y en todas las instituciones públicas. El idioma guaraní deberá ser objeto de especial atención por parte del Estado, como signo de la identidad cultural de la nación, instrumento de cohesión nacional y medio de comunicación de la mayoría de la población paraguaya”.

Que, por otro lado, el artículo 14° sostiene “De las leyes y demás disposiciones normativas. Las leyes de la República del Paraguay serán promulgadas en idioma castellano, pero las instituciones del Estado deberán contar con textos en las dos lenguas oficiales, una vez establecidos el alfabeto y la gramática oficial aplicable. Igual procedimiento se utilizará con las demás disposiciones normativas de rango inferior a la ley, incluidas las ordenanzas municipales, una vez establecidos el alfabeto y la gramática oficial del idioma guaraní”.

Que, en otro orden, el artículo 15° refiere “Del uso en el ámbito judicial. Ambas lenguas oficiales serán aceptadas indistintamente en la administración de la justicia. Para el efecto, las mismas deberán tener operadores y auxiliares de justicia con competencia comunicativa oral y escrita, en ambas lenguas oficiales. Las resoluciones definitivas que afecten a partes que sólo hablan el idioma guaraní se dictarán en ambas lenguas oficiales, una vez establecidos el alfabeto y la gramática oficial del idioma guaraní”.

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

Que, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Acordada N° 633/10, ratifica el contenido de las “100 Reglas de Brasilia”, en la cual se sostiene en su Sección 2ª, apartado 4 lo siguiente: “Pertinencia a comunidades indígenas. Las personas integrantes de las comunidades indígenas pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán las condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho sistema de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen o identidad indígenas. Los poderes judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los órganos de la administración de justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones culturales”.

Que, la Corte Suprema de Justicia se enmarca en la tarea de arbitrar los medios necesarios, recursos técnicos y de talentos humanos, con el fin de ofrecer a los justiciables un mecanismo efectivo de hacer accesible la Justicia a todo ciudadano paraguayo en ambos idiomas oficiales, mediante la implementación de la Ley N° 4251/10 – “De Lenguas” a nivel jurisdiccional en toda la República del Paraguay.

Que, el Art. 3° de la Ley N° 609/95, Que organiza la Corte Suprema de Justicia, establece como deberes y atribuciones de la misma, dictar su propio reglamento interno, las acordadas, y todos los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia.

Que, el modelo de guaraní a aplicarse en todo momento por vigencia de la Ley de Lenguas es parte de un bilingüismo coordinado conocido como guaraní paraguayo usual para la comunicación popular, con Préstamos Integrados (Hispanismos Transfonetizados) y con Préstamos no Integrados; es el habla en el cual los paraguayos se comunican día a día. Teniendo presente que no somos españoles ni guaraníes, somos paraguayos mestizos, provenientes de una sociedad que ha perdurado por más de cinco siglos. Por esta razón el Poder Judicial de la República del Paraguay por medio de la Corte Suprema de Justicia ha de optar como sistema de comunicación el Guaraní Paraguayo en su expresión oral y escrita para formar y capacitar a sus magistrados, funcionarios, actuarios, facilitadores judiciales, con el objeto de interpretar fielmente el lenguaje actual que trae el reo, acusado, procesado o testigos en los estrados judiciales, lográndose con esto una justicia lingüística impartida en su justa dimensión.

Que, los contenidos, conjuntos de ideas sobre algo – cultura guaraní - cultura hispánica, cultura paraguaya y la sociedad pluriétnica y pluricultural del Paraguay - organizados programáticamente entorno a informaciones sobre las culturas hispano – guaraní, han sido seleccionados de forma lógica y estructuralmente ordenados, de tal modo que, las personas afectadas a la Corte Suprema de Justicia, encuentren en ellos un marco referencial adecuado, fácil de comprender, eficiente y eficaz para lograr el objetivo que orienten sus respectivos aprendizajes y posterior aplicación en el campo de la justicia.

NOTARIADO 2017

Que, los textos elegidos, tales como el Diccionario General Bilingüe Castellano – Guaraní/Guaraní Castellano de autoría del Profesor Doctor Ramón Silva, para el ámbito jurídico, en soporte virtual interactivo y también soporte papel-impreso y demás libros de contenidos con contenidos antropológicos, sociológicos y lingüísticos que sustentan al guaraní paraguayo usual para la comunicación popular sean soportes y medios suficientes para apoyar el conocimiento, las consultas, la enseñanza y los aprendizajes, la formación y la educación de todas las personas afectadas al área judicial y la justicia paraguaya en general.

Que, a efectos de cumplimentar sus objetivos y la implementación, corresponde a la Corte Suprema de Justicia, aprobar las medidas de aplicación de la Ley de Lenguas en todas las circunscripciones que corresponden al Poder Judicial

Por tanto,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACUERDA:

Art. 1° Organizar a través de la Dirección de Políticas Lingüísticas Judiciales, todo lo concerniente a la formación de ciudadanos que recurran a la administración de justicia y de sus auxiliares, en cuanto a la educación y la capacitación de los mismos según la Constitución Nacional y la Ley N° 4251/2010 “De Lenguas” y otras normativas que fundamentan la aplicación del bilingüismo paraguayo.

Art. 2° Establecer el estilo y la modalidad de la formación, educación y capacitación de todos los agentes involucrados en la administración de justicia, con competencia comunicativa oral y escrita, en ambas lenguas oficiales, de modo a dictar las resoluciones, sean ellas definitivas o no, en castellano y en guaraní, de conformidad a la Ley.

Art. 3° Disponer la obligatoriedad del uso de los idiomas oficiales castellano y guaraní dentro del Poder Judicial, en todas las Circunscripciones de la República, afectando a todos los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Miembros de Tribunales de Apelación, Jueces de Primera Instancia, Jueces de Paz y demás funcionarios de todos los rangos de la Administración de Justicia.

Art. 4° Aprobar a partir de la fecha, la implementación y el uso de la variante del Guaraní Paraguayo para la comunicación popular en el ámbito jurídico, tanto oral como escrita y los contenidos de su universo cultural, basados en fundamentos antropológicos, sociológicos, históricos, lingüísticos y jurídicos, así como la utilización de todos los materiales de apoyo, diccionarios, textos y trabajos de investigación lingüísticos y culturales, que publicare la Dirección de Políticas Lingüísticas Judiciales, a instancias de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 5° Anotar, registrar y notificar.

**100 REGLAS DE BRASILIA
SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA
DE LAS PERSONAS EN
CONDICION DE
VULNERABILIDAD**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro del marco de los trabajos de su XIV edición, ha considerado necesaria la elaboración de unas Reglas Básicas relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. De esta manera, se desarrollan los principios recogidos en la “Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano” (Cancún 2002), específicamente los que se incluyen en la parte titulada “Una justicia que protege a los más débiles” (apartados 23 a 34).

En los trabajos preparatorios de estas Reglas también han participado las principales redes iberoamericanas de operadores y servidores del sistema judicial: la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. Sus aportaciones han enriquecido de forma indudable el contenido del presente documento.

El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social.

Las presentes Reglas no se limitan a establecer unas bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.

Este documento se inicia con un Capítulo que, tras concretar su finalidad, define tanto sus beneficiarios como sus destinatarios. El siguiente Capítulo contiene una serie de reglas aplicables a aquellas personas en condición de vulnerabilidad que han de acceder o han accedido a la justicia, como parte del proceso, para la defensa de sus derechos. Posteriormente contiene aquellas reglas que resultan de aplicación a cualquier persona en condición de vulnerabilidad que participe en un acto judicial, ya sea como parte que ejercita una acción o que defiende su derecho frente a una acción, ya sea en calidad de testigo, víctima o en cualquier otra condición.

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

El último Capítulo contempla una serie de medidas destinadas a fomentar la efectividad de estas Reglas, de tal manera que puedan contribuir de manera eficaz a la mejora de las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

La Cumbre Judicial Iberoamericana es consciente de que la promoción de una efectiva mejora del acceso a la justicia exige una serie de medidas dentro de la competencia del poder judicial. Asimismo, y teniendo en cuenta la importancia del presente documento para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, se recomienda a todos los poderes públicos que, cada uno dentro de su respectivo ámbito de competencia, promuevan reformas legislativas y adopten medidas que hagan efectivo el contenido de estas Reglas. Asimismo se hace un llamamiento a las Organizaciones Internacionales y Agencias de Cooperación para que tengan en cuenta estas Reglas en sus actividades, incorporándolas en los distintos programas y proyectos de modernización del sistema judicial en que participen.

CAPÍTULO I – PRELIMINAR

SECCIÓN 1ª.- FINALIDAD

(1) Las presentes Reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.

(2) Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares.

Asimismo se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas.

SECCIÓN 2ª.- BENEFICIARIOS DE LAS REGLAS

1.- Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad

(3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

(4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico.

2.- Edad

(5) Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable. Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo.

(6) El envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia.

3.- Discapacidad

(7) Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

(8) Se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación.

4.- Pertenencia a comunidades indígenas

(9) Las personas integrantes de las comunidades indígenas pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán las condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho sistema de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen o identidad indígenas. Los poderes judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los órganos de la administración de justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones culturales.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 48 sobre las formas de resolución de conflictos propios de los pueblos indígenas, propiciando su armonización con el sistema de administración de justicia estatal.

5.- Victimización

(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa.

(11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta.

(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria)

Asimismo procurarán que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria)

Y procurarán garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito.

6.- Migración y desplazamiento interno

(13) El desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad puede constituir una causa de vulnerabilidad, especialmente en los supuestos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Se considera trabajador migratorio toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. Asimismo se reconocerá una protección especial a los beneficiarios del estatuto de refugiado conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como a los solicitantes de asilo.

(14) También pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad los desplazados internos, entendidos como personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

7.- Pobreza

(15) La pobreza constituye una causa de exclusión social, tanto en el plano económico como en los planos social y cultural, y supone un serio obstáculo para el acceso a la justicia especialmente en aquellas personas en las que también concurre alguna otra causa de vulnerabilidad.

NOTARIADO 2017

(16) Se promoverá la cultura o alfabetización jurídica de las personas en situación de pobreza, así como las condiciones para mejorar su efectivo acceso al sistema de justicia.

8.- Género

(17) La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad.

(18) Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

(19) Se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica.

(20) Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones.

Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna.

9.- Pertenencia a minorías

(21) Puede constituir una causa de vulnerabilidad la pertenencia de una persona a una minoría nacional o étnica, religiosa y lingüística, debiéndose respetar su dignidad cuando tenga contacto con el sistema de justicia.

10.- Privación de libertad

(22) La privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando concurre alguna causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores.

(23) A efectos de estas Reglas, se considera privación de libertad la que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro motivo.

SECCIÓN 3ª.- DESTINATARIOS: ACTORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA

(24) Serán destinatarios del contenido de las presentes Reglas:

a) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

del sistema judicial;

b) Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de Administración de Justicia de conformidad con la legislación interna de cada país;

c) Los Abogados y otros profesionales del Derecho, así como los Colegios y Agrupaciones de Abogados;

d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de Ombudsman.

e) Policías y servicios penitenciarios.

f) Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.

CAPÍTULO II - EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS

El presente Capítulo es aplicable a aquellas personas en condición de vulnerabilidad que han de acceder o han accedido a la justicia, como parte del proceso, para la defensa de sus derechos.

(25) Se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad.

SECCIÓN 1ª.- CULTURA JURÍDICA

(26) Se promoverán actuaciones destinadas a proporcionar información básica sobre sus derechos, así como los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

(27) Se incentivará la participación de funcionarios y operadores del sistema de justicia en la labor de diseño, divulgación y capacitación de una cultura cívica jurídica, en especial de aquellas personas que colaboran con la administración de justicia en zonas rurales y en áreas desfavorecidas de las grandes ciudades.

SECCIÓN 2ª.- ASISTENCIA LEGAL Y DEFENSA PÚBLICA

1.- Promoción de la asistencia técnico jurídica de la persona en condición de vulnerabilidad

(28) Se constata la relevancia del asesoramiento técnico-jurídico para la efectividad de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad:

- En el ámbito de la asistencia legal, es decir, la consulta jurídica sobre toda cuestión susceptible de afectar a los derechos o intereses legítimos de la persona en condición de vulnerabilidad, incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial;
- En el ámbito de la defensa, para defender derechos en el proceso ante todas las jurisdicciones y en todas las instancias judiciales;
- Y en materia de asistencia letrada al detenido.

(29) Se destaca la conveniencia de promover la política pública destinada a garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales: ya sea a través de la ampliación de funciones de la Defensoría Pública, no solamente en el orden penal sino también en otros órdenes jurisdiccionales; ya sea a través de la creación de mecanismos de asistencia letrada: consultorías jurídicas con la participación de las universidades, casas de justicia, intervención de colegios o barras de abogados... Todo ello sin perjuicio de la revisión de los procedimientos y los requisitos procesales como forma de facilitar el acceso a la justicia, a la que se refiere la Sección 4ª del presente Capítulo.

2.- Asistencia de calidad, especializada y gratuita

(30) Se resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada. A tal fin, se promoverán instrumentos destinados al control de la calidad de la asistencia.

(31) Se promoverán acciones destinadas a garantizar la gratuidad de la asistencia técnico-jurídica de calidad a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones.

SECCIÓN 3ª.- DERECHO A INTÉRPRETE

(32) Se garantizará el uso de intérprete cuando el extranjero que no conozca la lengua o lenguas oficiales ni, en su caso, la lengua oficial propia de la comunidad, hubiese de ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución.

SECCIÓN 4ª.- REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS REQUISITOS PROCESALES COMO FORMA DE FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

(33) Se revisarán las reglas de procedimiento para facilitar el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad, adoptando aquellas medidas de organización y de gestión judicial que resulten conducentes a tal fin.

1.- Medidas procesales

Dentro de esta categoría se incluyen aquellas actuaciones que afectan la regulación del procedimiento, tanto en lo relativo a su tramitación, como en relación con los requisitos exigidos para la práctica de los actos procesales.

(34) Requisitos de acceso al proceso y legitimación. Se propiciarán medidas para la simplificación y divulgación de los requisitos exigidos por el ordenamiento para la práctica de determinados actos, a fin de favorecer el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, y sin perjuicio de la participación de otras instancias que puedan coadyuvar en el ejercicio de acciones en defensa de los derechos de estas personas.

(35) Oralidad. Se promoverá la oralidad para mejorar las condiciones de celebración de las actuaciones judiciales contempladas en el Capítulo III de las presentes Reglas, y

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

favorecer una mayor agilidad en la tramitación del proceso, disminuyendo los efectos del retraso de la resolución judicial sobre la situación de las personas en condición de vulnerabilidad.

(36) Formularios. Se promoverá la elaboración de formularios de fácil manejo para el ejercicio de determinadas acciones, estableciendo las condiciones para que los mismos sean accesibles y gratuitos para las personas usuarias, especialmente en aquellos supuestos en los que no sea preceptiva la asistencia letrada.

(37) Anticipo jurisdiccional de la prueba. Se recomienda la adaptación de los procedimientos para permitir la práctica anticipada de la prueba en la que participe la persona en condición de vulnerabilidad, para evitar la reiteración de declaraciones, e incluso la práctica de la prueba antes del agravamiento de la discapacidad o de la enfermedad. A estos efectos, puede resultar necesaria la grabación en soporte audiovisual del acto procesal en el que participe la persona en condición de vulnerabilidad, de tal manera que pueda reproducirse en las sucesivas instancias judiciales.

2.- Medidas de organización y gestión judicial

Dentro de esta categoría cabe incluir aquellas políticas y medidas que afecten a la organización y modelos de gestión de los órganos del sistema judicial, de tal manera que la propia forma de organización del sistema de justicia facilite el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Estas políticas y medidas podrán resultar de aplicación tanto a jueces profesionales como a jueces no profesionales.

(38) Agilidad y prioridad. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto.

Cuando las circunstancias de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso por parte de los órganos del sistema de justicia.

(39) Coordinación. Se establecerán mecanismos de coordinación intrainstitucionales e interinstitucionales, orgánicos y funcionales, destinados a gestionar las interdependencias de las actuaciones de los diferentes órganos y entidades, tanto públicas como privadas, que forman parte o participan en el sistema de justicia.

(40) Especialización. Se adoptarán medidas destinadas a la especialización de los profesionales, operadores y servidores del sistema judicial para la atención de las personas en condición de vulnerabilidad. En las materias en que se requiera, es conveniente la atribución de los asuntos a órganos especializados del sistema judicial.

(41) Actuación interdisciplinaria. Se destaca la importancia de la actuación de equipos multidisciplinarios, conformados por profesionales de las distintas áreas, para mejorar la respuesta del sistema judicial ante la demanda de justicia de una persona en condición de vulnerabilidad.

(42) Proximidad. Se promoverá la adopción de medidas de acercamiento de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población que, debido a las circunstancias propias de su situación de vulnerabilidad, se encuentran en lugares geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación.

SECCIÓN 5ª.- MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1.- Formas alternativas y personas en condición de vulnerabilidad

(43) Se impulsarán las formas alternativas de resolución de conflictos en aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del proceso como durante la tramitación del mismo. La mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de personas en condición de vulnerabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de los servicios formales de justicia.

(44) En todo caso, antes de iniciar la utilización de una forma alternativa en un conflicto concreto, se tomarán en consideración las circunstancias particulares de cada una de las personas afectadas, especialmente si se encuentran en alguna de las condiciones o situaciones de vulnerabilidad contempladas en estas Reglas. Se fomentará la capacitación de los mediadores, árbitros y otras personas que intervengan en la resolución del conflicto.

2.- Difusión e información

(45) Se deberá promover la difusión de la existencia y características de estos medios entre los grupos de población que resulten sus potenciales usuarios cuando la ley permita su utilización.

(46) Cualquier persona vulnerable que participe en la resolución de un conflicto mediante cualquiera de estos medios deberá ser informada, con carácter previo, sobre su contenido, forma y efectos. Dicha información se suministrará de conformidad con lo dispuesto por la Sección 1ª del Capítulo III de las presentes reglas.

3.- Participación de las personas en condición de vulnerabilidad en la Resolución Alternativa de Conflictos

(47) Se promoverá la adopción de medidas específicas que permitan la participación de las personas en condición de vulnerabilidad en el mecanismo elegido de Resolución Alternativa de Conflictos, tales como la asistencia de profesionales, participación de intérpretes, o la intervención de la autoridad parental para los menores de edad cuando sea necesaria. La actividad de Resolución Alternativa de Conflictos debe llevarse a cabo en un ambiente seguro y adecuado a las circunstancias de las personas que participen.

SECCIÓN 6ª.- SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DENTRO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

(48) Con fundamento en los instrumentos internacionales en la materia, resulta

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

conveniente estimular las formas propias de justicia en la resolución de conflictos surgidos en el ámbito de la comunidad indígena, así como propiciar la armonización de los sistemas de administración de justicia estatal e indígena basada en el principio de respeto mutuo y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

(49) Además serán de aplicación las restantes medidas previstas en estas Reglas en aquellos supuestos de resolución de conflictos fuera de la comunidad indígena por parte del sistema de administración de justicia estatal, donde resulta asimismo conveniente abordar los temas relativos al peritaje cultural y al derecho a expresarse en el propio idioma.

CAPÍTULO III – CELEBRACIÓN DE ACTOS JUDICIALES

El contenido del presente Capítulo resulta de aplicación a cualquier persona en condición de vulnerabilidad que participe en un acto judicial, ya sea como parte o en cualquier otra condición.

(50) Se velará para que en toda intervención en un acto judicial se respete la dignidad de la persona en condición de vulnerabilidad, otorgándole un trato específico adecuado a las circunstancias propias de su situación.

SECCIÓN 1ª.- INFORMACIÓN PROCESAL O JURISDICCIONAL

(51) Se promoverán las condiciones destinadas a garantizar que la persona en condición de vulnerabilidad sea debidamente informada sobre los aspectos relevantes de su intervención en el proceso judicial, en forma adaptada a las circunstancias determinantes de su vulnerabilidad.

1.- Contenido de la información

(52) Cuando la persona vulnerable participe en una actuación judicial, en cualquier condición, será informada sobre los siguientes extremos:

- La naturaleza de la actuación judicial en la que va a participar
- Su papel dentro de dicha actuación
- El tipo de apoyo que puede recibir en relación con la concreta actuación, así como la información de qué organismo o institución puede prestarlo

(53) Cuando sea parte en el proceso, o pueda llegar a serlo, tendrá derecho a recibir aquella información que resulte pertinente para la protección de sus intereses. Dicha información deberá incluir al menos:

- El tipo de apoyo o asistencia que puede recibir en el marco de las actuaciones judiciales
- Los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso
- La forma y condiciones en las que puede acceder a asesoramiento jurídico o a la asistencia técnico-jurídica gratuita en los casos en los que esta posibilidad sea contemplada por el ordenamiento existente
- El tipo de servicios u organizaciones a las que puede dirigirse para recibir apoyo

2.- Tiempo de la información

(54) Se deberá prestar la información desde el inicio del proceso y durante toda su tramitación, incluso desde el primer contacto con las autoridades policiales cuando se trate de un procedimiento penal.

3.- Forma o medios para el suministro de la información

(55) La información se prestará de acuerdo a las circunstancias determinantes de la condición de vulnerabilidad, y de manera tal que se garantice que llegue a conocimiento de la persona destinataria. Se resalta la utilidad de crear o desarrollar oficinas de información u otras entidades creadas al efecto.

Asimismo resultan destacables las ventajas derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías para posibilitar la adaptación a la concreta situación de vulnerabilidad.

4.- Disposiciones específicas relativas a la víctima

(56) Se promoverá que las víctimas reciban información sobre los siguientes elementos del proceso jurisdiccional:

- Posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido
- Lugar y modo en que pueden presentar una denuncia o escrito en el que ejercite una acción
- Curso dado a su denuncia o escrito
- Fases relevantes del desarrollo del proceso
- Resoluciones que dicte el órgano judicial

(57) Cuando exista riesgo para los bienes jurídicos de la víctima, se procurará informarle de todas las decisiones judiciales que puedan afectar a su seguridad y, en todo caso, de aquéllas que se refieran a la puesta en libertad de la persona inculpada o condenada, especialmente en los supuestos de violencia intrafamiliar.

SECCIÓN 2ª.- COMPRENSIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES

(58) Se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona en condición de vulnerabilidad, garantizando que ésta pueda comprender su alcance y significado.

1.- Notificaciones y requerimientos

(59) En las notificaciones y requerimientos, se usarán términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad incluidas en estas Reglas. Asimismo, se evitarán expresiones o elementos intimidatorios, sin perjuicio de las ocasiones en que resulte necesario el uso de expresiones conminatorias.

2.- Contenido de las resoluciones judiciales

(60) En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

3.- Comprensión de actuaciones orales

(61) Se fomentarán los mecanismos necesarios para que la persona en condición de vulnerabilidad comprenda los juicios, vistas, comparecencias y otras actuaciones judiciales orales en las que participe, teniéndose presente el contenido del apartado 3 de la Sección 3ª del presente Capítulo.

SECCIÓN 3ª.- COMPARECENCIA EN DEPENDENCIAS JUDICIALES

(62) Se velará para que la comparecencia en actos judiciales de una persona en condición de vulnerabilidad se realice de manera adecuada a las circunstancias propias de dicha condición.

1.- Información sobre la comparecencia

(63) Con carácter previo al acto judicial, se procurará proporcionar a la persona en condición de vulnerabilidad información directamente relacionada con la forma de celebración y contenido de la comparecencia, ya sea sobre la descripción de la sala y de las personas que van a participar, ya sea destinada a la familiarización con los términos y conceptos legales, así como otros datos relevantes al efecto.

2.- Asistencia

(64) Previa a la celebración del acto.

Se procurará la prestación de asistencia por personal especializado (profesionales en Psicología, Trabajo Social, intérpretes, traductores u otros que se consideren necesarios) destinada a afrontar las preocupaciones y temores ligados a la celebración de la vista judicial.

(65) Durante el acto judicial

Cuando la concreta situación de vulnerabilidad lo aconseje, la declaración y demás actos procesales se llevarán a cabo con la presencia de un profesional, cuya función será la de contribuir a garantizar los derechos de la persona en condición de vulnerabilidad.

También puede resultar conveniente la presencia en el acto de una persona que se configure como referente emocional de quien se encuentra en condición de vulnerabilidad.

3.- Condiciones de la comparecencia

Lugar de la comparecencia

(66) Resulta conveniente que la comparecencia tenga lugar en un entorno cómodo, accesible, seguro y tranquilo.

(67) Para mitigar o evitar la tensión y angustia emocional, se procurará evitar en lo posible la coincidencia en dependencias judiciales de la víctima con el inculpado del delito; así como la confrontación de ambos durante la celebración de actos judiciales, procurando la protección visual de la víctima.

Tiempo de la comparecencia

NOTARIADO 2017

(68) Se procurará que la persona vulnerable espere el menor tiempo posible para la celebración del acto judicial.

Los actos judiciales deben celebrarse puntualmente. Cuando esté justificado por las razones concurrentes, podrá otorgarse preferencia o prelación a la celebración del acto judicial en el que participe la persona en condición de vulnerabilidad.

(69) Es aconsejable evitar comparecencias innecesarias, de tal manera que solamente deberán comparecer cuando resulte estrictamente necesario conforme a la normativa jurídica. Se procurará asimismo la concentración en el mismo día de la práctica de las diversas actuaciones en las que deba participar la misma persona.

(70) Se recomienda analizar la posibilidad de preconstituir la prueba o anticipo jurisdiccional de la prueba, cuando sea posible de conformidad con el Derecho aplicable.

(71) En determinadas ocasiones podrá procederse a la grabación en soporte audiovisual del acto, cuando ello pueda evitar que se repita su celebración en sucesivas instancias judiciales.

Forma de comparecencia

(72) Se procurará adaptar el lenguaje utilizado a las condiciones de la persona en condición de vulnerabilidad, tales como la edad, el grado de madurez, el nivel educativo, la capacidad intelectual, el grado de discapacidad o las condiciones socioculturales. Se debe procurar formular preguntas claras, con una estructura sencilla

(73) Quienes participen en el acto de comparecencia deben evitar emitir juicios o críticas sobre el comportamiento de la persona, especialmente en los casos de víctimas del delito.

(74) Cuando sea necesario se protegerá a la persona en condición de vulnerabilidad de las consecuencias de prestar declaración en audiencia pública, podrá plantearse la posibilidad de que su participación en el acto judicial se lleve a cabo en condiciones que permitan alcanzar dicho objetivo, incluso excluyendo su presencia física en el lugar del juicio o de la vista, siempre que resulte compatible con el Derecho del país.

A tal efecto, puede resultar de utilidad el uso del sistema de videoconferencia o del circuito cerrado de televisión.

4.- Seguridad de las víctimas en condición de vulnerabilidad

(75) Se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva de los bienes jurídicos de las personas en condición de vulnerabilidad que intervengan en el proceso judicial en calidad de víctimas o testigos; así como garantizar que la víctima sea oída en aquellos procesos penales en los que estén en juego sus intereses.

(76) Se prestará especial atención en aquellos supuestos en los que la persona está sometida a un peligro de victimización reiterada o repetida, tales como víctimas amenazadas en los casos de delincuencia organizada, menores víctimas de abuso sexual o malos tratos, y mujeres víctimas de violencia dentro de la familia o de la pareja.

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

5.- Accesibilidad de las personas con discapacidad

(77) Se facilitará la accesibilidad de las personas con discapacidad a la celebración del acto judicial en el que deban intervenir, y se promoverá en particular la reducción de barreras arquitectónicas, facilitando tanto el acceso como la estancia en los edificios judiciales.

6.- Participación de niños, niñas y adolescentes en actos judiciales

(78) En los actos judiciales en los que participen menores se debe tener en cuenta su edad y desarrollo integral, y en todo caso:

- Se deberán celebrar en una sala adecuada.
- Se deberá facilitar la comprensión, utilizando un lenguaje sencillo.
- Se deberán evitar todos los formalismos innecesarios, tales como la toga, la distancia física con el tribunal y otros similares.

7.- Integrantes de comunidades indígenas

(79) En la celebración de los actos judiciales se respetará la dignidad, las costumbres y las tradiciones culturales de las personas integrantes de comunidades indígenas, conforme a la legislación interna de cada país.

SECCIÓN 4ª.- PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD

1.- Reserva de las actuaciones judiciales

(80) Cuando el respeto de los derechos de la persona en condición de vulnerabilidad lo aconseje, podrá plantearse la posibilidad de que las actuaciones jurisdiccionales orales y escritas no sean públicas, de tal manera que solamente puedan acceder a su contenido las personas involucradas.

2.- Imagen

(81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o en vídeo, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad.

(82) En todo caso, no debe estar permitida la toma y difusión de imágenes en relación con los niños, niñas y adolescentes, por cuanto afecta de forma decisiva a su desarrollo como persona.

3.- Protección de datos personales

(83) En las situaciones de especial vulnerabilidad, se velará para evitar toda publicidad no deseada de los datos de carácter personal de los sujetos en condición de vulnerabilidad.

(84) Se prestará una especial atención en aquellos supuestos en los cuales los datos se encuentran en soporte digital o en otros soportes que permitan su tratamiento automatizado.

CAPÍTULO IV – EFICACIA DE LAS REGLAS

Este Capítulo contempla expresamente una serie de medidas destinadas a fomentar la efectividad de las Reglas, de tal manera que contribuyan de manera eficaz a la mejora de las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

1.- Principio general de colaboración

(85) La eficacia de las presentes Reglas está directamente ligada al grado de colaboración entre sus destinatarios, tal y como vienen definidos en la Sección 3ª del Capítulo I.

La determinación de los órganos y entidades llamadas a colaborar depende de las circunstancias propias de cada país, por lo que los principales impulsores de las políticas públicas deben poner un especial cuidado tanto para identificarlos y recabar su participación, como para mantener su colaboración durante todo el proceso.

(86) Se propiciará la implementación de una instancia permanente en la que puedan participar los diferentes actores a los que se refiere el apartado anterior, y que podrá establecerse de forma sectorial.

(87) Se destaca la importancia de que el Poder Judicial colabore con los otros Poderes del Estado en la mejora del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

(88) Se promoverá la participación de las autoridades federales y centrales, de las entidades de gobierno autónomo y regional, así como de las entidades estatales en los estados federales, dado que frecuentemente el ámbito de sus competencias se encuentra más próximo a la gestión directa de la protección social de las personas más desfavorecidas.

(89) Cada país considerará la conveniencia de propiciar la participación de las entidades de la sociedad civil por su relevante papel en la cohesión social, y por su estrecha relación e implicación con los grupos de personas más desfavorecidas de la sociedad.

2.- Cooperación internacional

(90) Se promoverá la creación de espacios que permitan el intercambio de experiencias en esta materia entre los distintos países, analizando las causas del éxito o del fracaso en cada una de ellas o, incluso, fijando buenas prácticas.

Estos espacios de participación pueden ser sectoriales. En estos espacios podrán participar representantes de las instancias permanentes que puedan crearse en cada uno de los Estados.

(91) Se insta a las Organizaciones Internacionales y Agencias de Cooperación para que:

- Continúen brindando su asistencia técnica y económica en el fortalecimiento y mejora del acceso a la justicia.
- Tengan en cuenta el contenido de estas Reglas en sus actividades, y lo incorporen, de

COMPENDIO A SER UTILIZADO EN LA CÁTEDRA DE GUARANÍ JURÍDICO

forma transversal, en los distintos programas y proyectos de modernización del sistema judicial en que participen.

- Impulsen y colaboren en el desarrollo de los mencionados espacios de participación.

3.- Investigación y estudios

(92) Se promoverá la realización de estudios e investigaciones en esta materia, en colaboración con instituciones académicas y universitarias.

4.- Sensibilización y formación de profesionales

(93) Se desarrollarán actividades que promuevan una cultura organizacional orientada a la adecuada atención de las personas en condición de vulnerabilidad a partir de los contenidos de las presentes Reglas.

(94) Se adoptarán iniciativas destinadas a suministrar una adecuada formación a todas aquellas personas del sistema judicial que, con motivo de su intervención en el proceso, tienen un contacto con las personas en condición de vulnerabilidad.

Se considera necesario integrar el contenido de estas Reglas en los distintos programas de formación y actualización dirigidos a las personas que trabajan en el sistema judicial.

5.- Nuevas tecnologías

(95) Se procurará el aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el progreso técnico para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

6.- Manuales de buenas prácticas sectoriales

(96) Se elaborarán instrumentos que recojan las mejores prácticas en cada uno de los sectores de vulnerabilidad, y que puedan desarrollar el contenido de las presentes Reglas adaptándolo a las circunstancias propias de cada grupo.

(97) Asimismo se elaborarán un catálogo de instrumentos internacionales referidos a cada uno de los sectores o grupos mencionados anteriormente.

7.- Difusión

(98) Se promoverá la difusión de estas Reglas entre los diferentes destinatarios de las mismas definidos en la Sección 3ª del Capítulo I.

(99) Se fomentarán actividades con los medios de comunicación para contribuir a configurar actitudes en relación con el contenido de las presentes Reglas.

8.- Comisión de seguimiento

(100) Se constituirá una Comisión de Seguimiento con las siguientes finalidades:

- Elevar a cada Plenario de la Cumbre un informe sobre la aplicación de las presentes Reglas.
- Proponer un Plan Marco de Actividades, a efectos de garantizar el seguimiento a las tareas de implementación del contenido de las presentes reglas en cada país.
- A través de los órganos correspondientes de la Cumbre, promover ante los organismos internacionales hemisféricos y regionales, así como ante las Cumbres de Presidentes y

NOTARIADO 2017

Jefes de Estado de Iberoamérica, la definición, elaboración, adopción y fortalecimiento de políticas públicas que promuevan el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia por parte de las personas en condición de vulnerabilidad.

- Proponer modificaciones y actualizaciones al contenido de estas Reglas. La Comisión estará compuesta por cinco miembros designados por la Cumbre Judicial Iberoamericana. En la misma podrán integrarse representantes de las otras Redes Iberoamericanas del sistema judicial que asuman las presentes Reglas. En todo caso, la Comisión tendrá un número máximo de nueve miembros.

“Esfuézate al
máximo. Lo que
siembres hoy dará sus
frutos mañana”

“No importa cuán
despacio vayas
mientras no te
detengas”

Cada vez más cerca de la Meta!!
